

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA  
DESPACHO 11

Magistrada Ponente: Ana Margoth Chamorro Benavides

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA No. 122

RADICACIÓN:	76001-23-31-000-2011-00970-00
ACCIÓN:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO- LESIVIDAD
DEMANDANTE:	COLPENSIONES <a href="mailto:notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co">notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co</a>
DEMANDADO:	SAULO SILVA ESCOBAR (Notificado en debida forma, no designó apoderado)
INSTANCIA:	PRIMERA-SISTEMA ESCRITURAL

OBJETO DE LA PROVIDENCIA.

Se dicta sentencia de primera instancia, agotadas las etapas procesales y al no existir causal de nulidad que invalide lo actuado, en los términos del artículo 170 del CCA.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El Instituto del Seguro Social- hoy Colpensiones, el 5 de julio de 2011, pidió la nulidad de la Resolución No 01699 de 2004 mediante la cual reconoció la pensión de vejez a favor del señor SAULO SILVA ESCOBAR.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro de la totalidad de las mesadas pensionales canceladas con ocasión del acto acusado.

Los **supuestos fácticos** relevantes son:

- 1) Mediante la Resolución No 01699 de 2004 el ISS reconoció pensión de vejez al señor Saulo Silva Escobar con base en 1.352 semanas de cotización, IBL de \$415.564 y tasa de reemplazo del 90%. Liquidó un retroactivo pensional de \$48.302.113 desde el 2 de octubre de 1999 hasta el 31 de marzo de 2004, valor que sería girado con la mesada pensional de abril de 2004.
- 2) Posteriormente, al realizar una auditoria selectiva de expedientes, evidenció que el reconocimiento se realizó con base en una historia laboral no generada por el sistema oficial del ISS y que el pensionado no contaba con semanas válidamente cotizadas.
- 3) Por Resolución No. 15491 del 7 de septiembre del 2007 el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado Seccional Valle dispuso iniciar la investigación administrativa con el fin de verificar la ilegalidad del reconocimiento pensional otorgado, para lo cual garantizó el debido proceso y derecho de contradicción.

- 4) Con auto 3689 de 11 de septiembre de 2007 se requirió al demandado para que rindiera declaración sobre lo sucedido.
- 5) Mediante Resolución No 01699 de 3 de octubre de 2007 el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado Seccional Valle revocó directamente la de resolución de reconocimiento de 2004.

Como **normas trasgredidas y concepto de la violación** presentó:

El artículo 48 de la Constitución Política de Colombia adicionado por el Acto Legislativo 01 del 2005, artículo 33 numeral 2 de la Ley 100 de 1993, artículo 9 de la ley 797 de 2003, artículo 12 literal b) del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Fundamentó el reproche de ilegalidad en una falsa motivación porque realmente el accionado no cumplió con los requisitos para adquirir el derecho de pensión.

Dijo que el accionado actuó de mala fe, generando un grave detrimento a los recursos públicos.

## 2. Contestación de la demanda.

El demandado, pese a que fue notificado en debida forma, guardó silencio.

## 3. Trámite procesal.

La demanda se radicó el **5 de julio de 2011**. El 2 de septiembre de 2011 se admitió la demanda y se negó la suspensión provisional.

El 22 de agosto de 2012 un despacho en descongestión asumió el conocimiento con base en los Acuerdos PSAA12-9221 de 2 de febrero de 2012 y PSAA12-9524 de 21 de junio de 2012.

El 13 de octubre de 2015, con ocasión de la Circular CSJVC15-113 de 30 de septiembre de 2015, el despacho 11 asumió el conocimiento.

El Tribunal realizó múltiples gestiones para la notificación personal del demandado sin éxito.

Con auto de 11 de febrero de 2019, luego de encontrar en la página web de la Rama Judicial que el demandado se encontraba privado de la libertad en establecimiento carcelario, la nueva titular del Despacho 11 ordenó su notificación personal en dicho lugar, la cual se surtió el 11 de diciembre de 2019<sup>1</sup>.

El demandado no designó apoderado judicial. Estar recluso en un centro carcelario no limita su facultad-poder de designar un mandatario judicial.

Mediante auto del 18 de abril de 2022 el Despacho se abrió a pruebas el proceso y se fijó fecha para recibir los testimonios solicitados por la parte actora. Con auto de 4 de mayo de 2022 se aceptó el desistimiento de los mismos.

El 18 de julio de 2022 se cerró el periodo probatorio por verificar que se incorporó la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de mayo de 2017, sobre la defraudación. Adicionalmente, se ordenó correr traslado a las partes para alegar.

El expediente pasó a Despacho para fallo el 23 de agosto de 2022.

---

<sup>1</sup> Ver folio 3. Mercurio 3

### 3. Alegatos de conclusión.

La parte demandante guardó silencio.

**Colpensiones** reiteró los argumentos expuestos en el libelo demandatorio.

## II. CONSIDERACIONES

### 1. Presupuestos procesales.

#### A. Competencia y cuantía.

De conformidad con el artículo 132 del C.C.A, en razón de la cuantía y la naturaleza del asunto, el trámite corresponde en primera instancia al Tribunal.

#### B. Ejercicio de la acción en término.

Conforme el numeral 2° del artículo 136 del C.C.A, los actos que reconocen prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo por la administración o los interesados, y en el presente caso los actos demandados corresponden al reconocimiento de una pensión de jubilación, por lo que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho podía invocarse en cualquier tiempo.

### 2. Problema jurídico a resolver.

El caso se circunscribe a resolver el siguiente problema jurídico:

¿Es ilegal el acto administrativo de reconocimiento de la pensión de vejez al señor Saulo Silva Escobar y se debe ordenar la devolución de lo percibido fruto de ese acto?

### 3. Tesis de la Sala.

El acto de reconocimiento es ilegal desde su expedición porque el demandado no cumplió con el número mínimo de semanas de cotización requeridas en el sistema general de seguridad social en pensiones y se obtuvo la prestación a partir de la comisión de un delito.

Por lo dicho, se impone ordenar la devolución de todo lo percibido con ocasión de la pensión ilegal por estar desvirtuada la presunción de buena fe.

### 4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

#### a. Bloque de constitucionalidad en materia pensional.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996, vinculante para Colombia en virtud del bloque de constitucionalidad inferido a partir del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, establece en la parte II, artículo 2.2., que es deber del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el pacto sin discriminación, mientras el artículo 4 del mismo estatuto dispone que el Estado sólo podrá someter tales derechos a limitaciones determinadas por ley, finalmente, el artículo 9 instituye que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social.

Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la vejez, lo cual se logra a través de las pensiones.

En el ordenamiento interno el artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Ver Sentencias C-841 de 2003 y T-1233 de 2008.

En cuanto a la sostenibilidad del sistema pensional la Corte Constitucional ha manifestado<sup>3</sup>:

Es importante resaltar que a partir del Acto Legislativo No. 1 de 2005 la garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional adquirió el estatus de principio constitucional prioritario y transversal a todo el sistema. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional el principio de sostenibilidad financiera tiene como finalidad que exista “correspondencia entre los recursos que ingresan al sistema de seguridad social y los recursos que deben destinarse a la protección de las personas que han asegurado su contingencia de vejez”. Para lograr dicha finalidad, el artículo 48 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, establece reglas especiales para el reconocimiento de pensiones.

Tales reglas se encaminan “a evitar los desequilibrios producidos por el otorgamiento de mesadas en cuantías excesivas, que no correspondan a lo efectivamente cotizado, que establezcan privilegios injustificados o que desconozcan el régimen legal bajo el que se causó el derecho”.

En este sentido, las reglas contenidas en el artículo 48 de la Constitución prohíben, entre otras: (i) la existencia de regímenes pensionales especiales o exceptuados; (ii) el cálculo de la cuantía de la pensión a partir de factores diferentes a los que sirvieron para calcular el valor de la cotización; **(iii) el reconocimiento de derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes;** o (iv) el otorgamiento de pensiones por un valor superior a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otras.

En la anterior providencia la Corte Constitucional, con efectos de sentencia de unificación, dejó establecido que el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional adquirió el estatus de principio constitucional prioritario y transversal a todo el sistema porque salvaguarda los principios de equidad, igualdad y justicia que rigen el Estado Social de Derecho.

De otra parte, se destaca que la Ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral de Seguridad Social. Dicho cuerpo normativo derogó los regímenes pensionales existentes para ese momento y los integró en uno sólo de carácter general.

#### **b. Reconocimiento de pensiones sin cumplimiento de requisitos**

La **Ley 797 del 2003**, mediante la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales, dispone:

**ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE.** Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.

<sup>3</sup> Corte Constitucional, SU 143 del 2020. MP.

Esta disposición fue declarada exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional en la sentencia **C-835 del 2003**.

La misma corporación, en criterio unificado contenido en la sentencia **SU182/19** dispuso:

“Es por lo anterior que frente a una circunstancia de ostensible ilegalidad, la Corte ha defendido que “la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias”.

La confianza mutua y la rectitud entre los afiliados y las autoridades administrativas es determinante para el correcto funcionamiento del sistema de pensiones. El incumplimiento de los requisitos, las maniobras fraudulentas para obtener una pensión, o el abuso por parte de la autoridad a través de trámites innecesarios o decisiones arbitrarias, alimentan un círculo vicioso que estimula la desconfianza y en el que, al final, todos pierden. El régimen pensional por excelencia supone un componente de solidaridad trans e intergeneracional, en el que la suerte de los colombianos está interconectada. Como ya dijo la Corte, “este ideal lo construimos todos. Nos hacemos todos responsables de su éxito o de su fracaso”. De ahí la necesidad de que los partícipes del sistema de pensiones obren con rectitud, lealtad y honestidad.

En conclusión, la revocatoria unilateral de un **acto de reconocimiento pensional se habilita ante un comportamiento lo suficientemente grave como para ser enmarcado en algún tipo delictivo**, sin que sea necesario demostrar la responsabilidad penal a través de una sentencia condenatoria. Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico también sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios. El cumplimiento de las normas es un presupuesto básico del Estado social y democrático de derecho. Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del principio general de la buena fe y permite crear un ambiente de confianza mutuo, imprescindible para el buen funcionamiento de la sociedad.

**La revocatoria directa es una poderosa herramienta que permite a la administración ejercer un control de legalidad sobre sus propios actos, pudiendo incluso invalidar, sin el consentimiento del afectado, decisiones que estaban en firme y produciendo efectos jurídicos. Este mecanismo es compatible con el orden constitucional, pues la defensa del imperio de la ley es una obligación ineludible de la administración lo que, en ocasiones, exige retirar inmediatamente los actos contrarios a la Constitución y la Ley. Un Estado que permite que una norma abiertamente ilegal continúe produciendo efectos, también es un factor de inseguridad que pone en entredicho su credibilidad y viabilidad**

A partir del análisis realizado en los capítulos anteriores, se concluye que es necesario precisar el alcance del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, así como reiterar los principios y criterios trazados por la Sentencia C-835 de 2003; y complementarlos para superar las diferencias que se han producido entre las salas de revisión, de la siguiente manera:

- (i) ***Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con justo título.*** Según dispone el artículo 58 de la Carta Política, la protección de los derechos adquiridos, implica que su obtención se dio “*con arreglo a las leyes vigentes*”. Los derechos que se obtienen irregularmente no pueden aspirar a la misma

protección e inmutabilidad de la que gozan los derechos obtenidos con apego a la Ley<sup>[187]</sup>.

- (ii) ***La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber.***
- (iii) ***Solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado***
- (iv) ***No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la pensión.***
- (v) ***Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios.*** El cumplimiento de las normas es un presupuesto básico del Estado social y democrático de derecho. Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del principio general de la buena fe y que permite crear un ambiente de confianza mutuo, imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional. El orden constitucional no protege la posición de quien pretende aprovecharse del error o infortunio ajeno para obtener un beneficio particular.
- (vi) ***Sujeción al debido proceso.*** La administración o autoridad competente no puede suspender un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido proceso que garantice al afectado su defensa.
- (vii) ***El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la historia laboral.*** Tanto el empleador<sup>[195]</sup> como las administradoras de pensiones<sup>[196]</sup> son las principales responsables de velar por la correcta expedición y custodia de los certificados que den cuenta fielmente de la trayectoria laboral de una persona. Pero, teniendo en cuenta que aún subsisten fallas en el manejo de la información, las administradoras de pensiones no pueden, sin más, modificar la historia laboral de un afiliado, salvo que cuenten con una “justificación bien razonada”<sup>[197]</sup> y sujeta a un debido proceso. El afiliado, por su parte, está en el derecho de controvertir el dictamen de la administración, y para ello podrá hacer uso de los medios supletivos de prueba a su alcance. El análisis del nivel de certeza que ofrecen estos medios alternos deberá hacerse caso a caso, y teniendo en cuenta, también, que la tutela no es el escenario para adelantar un examen probatorio a fondo, ni reemplaza la competencia del juez ordinario, quien tiene la palabra definitiva.
- (viii) ***El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse como un escenario puramente adversarial.*** Atendiendo las fallas históricas en el manejo de la información laboral, y considerando que el trabajador es la *parte débil*<sup>[198]</sup> del sistema, las administradoras de pensiones no pueden asumir el procedimiento de revocatoria como una instancia meramente adversarial. Están obligadas a utilizar sus competencias de investigación e inspección, incluso de oficio, para corroborar o desestimar los argumentos y pruebas que ponga de presente el trabajador<sup>[199]</sup>. En caso de que el afiliado allegue algún medio de prueba que soporte razonablemente su versión, no se podrá revocar su derecho, hasta tanto la administración agote los medios a su alcance para verificar las pruebas e intentar aproximarse a la realidad fáctica de lo sucedido.

- (ix) **Efectos de la revocatoria.** La revocatoria directa solo tiene efectos hacia el futuro (*ex nunc*). La administración no puede recuperar los dineros que haya girado en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir al juez administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que ocasionó un acto administrativo contrario a derecho.
- (x) **Alcance de la revocatoria y recurso judicial.** La revocatoria unilateral es un mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración. Esta no resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni tiene la competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus efectos. Tanto la administración como los particulares podrán acudir ante el juez competente para resolver de forma definitiva las diferencias que surjan en torno a un reconocimiento pensional.

En los términos descritos, la Sala Plena unifica su jurisprudencia en relación con la figura de la revocatoria directa para asuntos pensionales, según el marco normativo dispuesto por la Ley 797 de 2003, y demás normas relevantes.

### c. Devolución de mesadas pensionales.

El inciso final del numeral 2º del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, dispone:

“(…) Los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. (Destaca la Sala)

Conforme al artículo 83 de la Carta Política, la conducta de los particulares y de las autoridades públicas debe estar gobernada por el principio de buena fe, que se presume frente a las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir, en las relaciones jurídico-administrativas; presunción legal que admite prueba en contrario<sup>4</sup>.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una «persona correcta (*vir bonus*)»<sup>5</sup>. La buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada»<sup>6</sup>.

En reciente pronunciamiento el Consejo de Estado<sup>7</sup> estudió lo relacionado a la devolución de lo pagado y la presunción de buena fe en pensiones reconocidas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sentencia que por la pertinencia al caso en estudio se transcribe en extenso, así:

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe señalado en el inciso segundo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su

<sup>4</sup> Sentencia C-071 de 2004.

<sup>5</sup> Sentencia T-475 de 1992.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B. CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Sentencia de 17 de octubre de 2017. Radicación: 73001-2333-000-2015-00229-01. Número Interno: 0913-2017.

favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe<sup>8</sup>.

Pero, distinta es la situación cuando el reconocimiento del derecho no deviene directamente del error de la administración, en cuyo caso, habrá que analizar situaciones particulares de los actos de los involucrados en la actuación, y la utilidad e incidencia en la producción de los actos definitivos que resolvieron la cuestión.

...

Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros que hubiera **percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad**, para dolosamente hacerse acreedor a una prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo<sup>9</sup>.” (Negrillas fuera de texto original).

Así las cosas, **la utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el reconocimiento de un derecho pensional, o alguna circunstancia similar, permite desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados de manera indebida.**” (Subraya la Sala)

## 5. Hechos probados

Con el material probatorio recaudado - el cual cuenta con suficiente mérito probatorio a la luz de la Ley 1564 de 2012<sup>15</sup>, por tratarse de documentos públicos auténticos que no fueron tachados por las partes en los términos del artículo 269 *ibidem*- la Sala de Decisión encuentra probado los siguientes hechos:

- 1) El ISS, mediante la Resolución No 01699 de 2004, reconoció pensión de vejez al señor Saulo Silva con base en 1.352 semanas de cotización e IBL de \$415.564 y tasa de reemplazo del 90%, generándose un retroactivo pensional de \$48.302.113 desde el 2 de octubre de 1999 hasta el 31 de marzo de 2004, valor que sería girado con la mesada pensional de abril de 2004.
- 2) Después de una auditoria selectiva el ISS evidenció que el reconocimiento se realizó con base en una **historia laboral no generada por el sistema oficial del ISS**.
- 1) Por Resolución No. 15491 del 7 de septiembre del 2007 el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado Seccional Valle dispuso iniciar la investigación administrativa con el fin de verificar la ilegalidad del reconocimiento pensional otorgado, para lo cual garantizó el debido proceso y derecho de contradicción.
- 2) Con auto 3689 de 11 de septiembre de 2007 se requirió al demandado para que rindiera declaración sobre lo sucedido.
- 3) Mediante Resolución No 01699 de 3 de octubre de 2007 el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado Seccional Valle revocó directamente la resolución de reconocimiento de 2004.

<sup>8</sup> En este sentido, se pronunció recientemente la Sala en las sentencias del 17 de noviembre de 2016, exp. 2677-15, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, y del 29 de junio de 2017, exp. 4321-2016, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<sup>9</sup> Sentencia del 25 de abril de 2002, sección segunda, subsección A, exp. 1783-01, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero.



- 4) Después de la suspensión del pago de las mesadas pensionales el demandado formuló acción de tutela en la que alegó que la revocatoria directa se produjo con violación del debido proceso y le generaba un perjuicio irremediable. Con sentencia de tutela de 8 de noviembre de 2007 dictada dentro del proceso No 2007-00134-00 se negó el amparo solicitado (fl. 53-60).

- 1) Obra certificación de 13 de septiembre de 2007 en la que el ISS manifiesta:

Que revisada la información de la base de datos de la historia laboral de los afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, no se ha encontrado ninguna cotización de aportes a los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte del señor (a) SILVA ESCOBAR SAULO identificado (a) con Cedula de Ciudadanía numero 2.436.955

- 2) Obra certificación de 25 de noviembre de 2008 en la que el jefe de Departamento de Historia Laboral y Nómina de Pensionados certificó:

Que revisada la información que reposa en el aplicativo de nomina de pensionados a el señor, SAULO SILVA ESCOBAR identificado con Cedula de Ciudadanía No. 2.436.955, se le concedió pensión de vejez mediante resolución No. 001699 de fecha 19 de marzo de 2004, a partir de la nomina de abril de 2004.

Valor Inicial de Pensión a Pagar	\$ 910.191
Valor Retroactivo girado en la mesada de abril de 2004	\$ 48.302.113
Total Mesadas Pagadas y Retroactivo entre abril de 2004 y mayo de 2007	\$ 91.112.928

Es de resaltar que en la nomina de julio de 2007 se suspende la prestación por encontrarse irregularidad en la Historia Laboral.

- 3) Colpensiones allegó oficio de 4 de mayo de 2022 en el cual informó los periodos en los cuales estuvo vigente la pensión de jubilación y el estado actual de la misma, así:

Que revisada la base de datos de la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, se determinó que al señor SILVA ESCOBAR SAULO, quien se identifica con la C.C. 2436955, le fue reconocida PENSION DE VEJEZ.

Dicha prestación ingresó en la Nómina de Pensionados en el periodo de abril de 2004.

La pensión fue retirada en el periodo de julio de 2007, estado en el que continua con corte al periodo de abril de 2022.

- 4) Obra certificación reciente sobre la no existencia de historia laboral del demandado:

CERTIFICA QUE:

Consultadas las Bases de Datos no se encontró información de aportes ni novedades laborales bajo el número de cédula de ciudadanía: 2.436.955 por lo tanto no se genera historia laboral bajo este número de identificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los Trece (13) días del Mayo de dos mil veintidós (2022).

- 5) El 19 de mayo del 2017 el Tribunal Superior Judicial de Cali – Sala Penal, desató el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali, en la cual condenó a HÉCTOR FABIÁN LLANOS MARMOLEJO, JUAN DE DIOS LLANOS MARMOLEJO, MINSA SINISTERRA GARCÍA y LUCELLY LOAYZA JIMÉNEZ por uso de documento público falso, fraude procesal y peculado por apropiación en la modalidad de continuados, a SANDRA LILIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ por los mismos delitos en la modalidad de continuados, a ANUNCIACIÓN MARMOLEJO como coautora del delito de fraude procesal; e interviniente en el de peculado por apropiación, en la modalidad de continuado, a SAULO SILVA ESCOBAR, JUAN FERNANDO RIVERA RIVERA, RAMIRO CUERO NIEVA, EFRAÍN RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANTONIO JARAMILLO CORREA y a NOHELIA GÓMEZ GALEANO como coautores del delito de peculado por apropiación en la modalidad de continuado.

En esta oportunidad el Tribunal resolvió:

“Primero. Declarar la prescripción de la acción penal respecto del delito de Uso en Documento Público Falso a favor de la señora SANDRA LILIANA

RAMÍREZ RODRÍGUEZ y en consecuencia cesar todo procedimiento por dicha conducta punible, de conformidad con el art. 39 del C de PP. Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali, según lo dispuesto en la parte motiva de esta decisión.

Destacó que:

“(…)

El señor SAULO SILVA ESCOBAR en indagatoria -folio 162 CO 8- **reconoció que sabía que sólo cotizó un año cuando laboró en un Colegio**, pues después se desempeñó como taxista, lo cual advirtió a su hermano abogado Justo Javier Silva Escobar, quien le indicó que tenía personas dentro del ISS que lo ayudarían y que aunque no le gustó eso accedió, además indicó que cuando se le entregó el cheque por el valor del retroactivo se lo entregó a su hermano porque el dinero era para ocho personas del ISS **y que en la resolución de reconocimiento pensional aparecían empresas para las cuales nunca había trabajado**.

**Es decir el señor SILVA ESCOBAR conoció de entrada que el trámite que le explicó su hermano no era legal, no siendo exculpatorio el hecho de que le haya dicho posteriormente que era una ayuda del gobierno, pues tanto no era así que le tocó entregar el retroactivo a favor de las personas que desde el inicio le indicó su hermano le ayudarían al interior del ISS, por un valor de 41.302.113.00.**

**A ello sumemos que en indagatoria Justo Javier Silva Escobar -el hermano abogado del procesado- -folio 281 CO 8- desmintió lo dicho por Saulo advirtiendo que no era cierto que ofreciera recaudar las pruebas al interior del ISS y tampoco que le haya dicho que el gobierno estaba ofreciendo pensiones.**

**Pero adicionalmente, en la investigación interna adelantada por el ISS se estableció que SAULO SILVA ESCOBAR nunca había cotizado al régimen nacional de pensiones y que en la Administradora de Pensiones del ISS no registraba ni una sola semana cotizada.**

(…)

**Resumiendo entonces, el señor SILVA ESCOBAR no tenía cotizada una sola semana, los esposos Nohelia Gómez Galeano y Miguel Antonio Marmolejo, dejando pasar con voluntad y conocimiento trámites pensionales sin el cumplimiento de los requisitos de ley.(…) conocedores de con qué emplearon y por cuánto tiempo habían cotizado, accedieron a adelantar el trámite pensional pese a no cumplir los requisitos, es decir como posibles beneficiarios, como directos implicados, como empleados conocían muy bien cuál era su historia laboral de cotización en cuanto a salarios, empleadores y tiempo, hecho frente al cual ningún abogado podía hacerlos incurrir en error”.**

(Negritas fuera de texto)

## 6. Caso concreto

Atendiendo al marco normativo, jurisprudencial expuesto y el material probatorio obrante en el plenario, la Sala declarará la nulidad del acto de reconocimiento pensional acusado con el siguiente argumento:

El ISS reconoció una pensión de vejez a favor del demandado con base en 1.352 semanas cotizadas, que, conforme a las investigaciones administrativas adelantadas internamente por la entidad, no existieron.

Lo anterior se corrobora con la sentencia dictada por el Tribunal de Cali en su contra, autoridad ante la cual resultó probado que accedió al reconocimiento pensional sin

el cumplimiento de los requisitos legales, pues no contaba con una sola semana de cotización, y se comportó en asocio criminal.

Bajo este panorama la Sala concluye que el demandado **NO** cumplió con las semanas de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones para acceder al reconocimiento pensional, por lo tanto, la información contenida en el acto administrativo acusado según el cual el demandado cuenta con 1.352 semanas cotizadas adolece de falsa motivación.

En tal virtud, sin asomo de duda, hay lugar a declarar la nulidad del acto censurado.

Respecto a la devolución de las mesadas pensionales, lo primero es decir que, como quedó demostrado, el reconocimiento indebido de la pensión **no** se originó en un error de la Administración sino en la mala fe del demandado.

En tal virtud, al contar con suficientes elementos indicadores de que la actuación del demandado fue determinante para la consecución indebida del derecho pensional, y que no fue una conducta honesta y transparente con la Administración, es viable ordenar la devolución de los dineros pagados, suma que será indexada con el IPC vigente al momento del pago y el vigente a la fecha de revocatoria del derecho, esto es octubre de 2007; y causará intereses moratorios desde allí hasta la restitución efectiva y total de lo pagado, que acorde con la información que reposa en el expediente corresponde a la suma de \$ 139.415.041.

Si se cancelaron sumas mayores por el mismo concepto, deberán ser reintegradas a favor de la entidad accionante.

## **7. Condena en costas**

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A. y dado que se evidenció temeridad y mala fe del demandado, la Sala lo condenará en costas.

## **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR** la nulidad de la Resolución No 01699 de 2004 mediante la cual se reconoció pensión de vejez al señor Saulo Silva Escobar.

**SEGUNDO: CONDENAR** al señor Saulo Silva Escobar identificado con la cédula No 2.436.955 a reintegrar al Instituto de Seguros Sociales –Hoy Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, la totalidad de la suma que percibió con ocasión a la pensión de vejez que le fue reconocida a través de la Resolución No 01699 de 2004, por valor total de 139.415.041, incluyendo lo percibido de manera posterior, si a ello hubiere lugar, suma que será indexada con el IPC vigente al momento del pago y el vigente a la fecha de la revocatoria del derecho, esto es, el 3 de octubre de 2007; y causará intereses moratorios desde el 3 de octubre de 2007 hasta el reintegro efectivo y total de esas sumas.

**TERCERO: CONDENAR** en costas al señor Saulo Silva Escobar. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

**CUARTO: ARCHIVAR** el expediente híbrido a la ejecutoria de la sentencia, previo registro en Samai.

**Esta decisión fue discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios**

virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19 y suscrita electrónicamente en la plataforma.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**  
Magistrada



**VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ**  
Magistrado



**ZORANNY CASTILLO OTALORA**  
Magistrada